

TÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 45

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia es el órgano jurisdiccional ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123.1 de la Constitución.

COMENTARIO¹

JESÚS CUDEREO BLAS

I. EXÉGESIS DEL PRECEPTO

El artículo en cuestión reproduce lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución. La composición y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia se

¹ Tras la modificación efectuada por la Ley Orgánica 5/1998, de 8 de julio, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dedica su Título IV a la «Organización Judicial», comprendiendo los artículos 45 a 50, ambos inclusive.

La rúbrica del mencionado Título es idéntica a la de los Estatutos de Autonomía de **Castilla y León** (Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero) y **Extremadura** (Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero). Por su parte, en el de **Galicia** (Ley Orgánica 1/1981, de 4 de abril), **Asturias** (Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre), **Cantabria** (Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre), **País Vasco** (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre), **Navarra** (Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral), **La Rioja** (Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio), **Castilla-La Mancha** (Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto), **Comunidad Valenciana** (Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio), **Región de Murcia** (Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio) y **Canarias** (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto) se ha optado por la rúbrica «De la Administración de Justicia». En el de **Andalucía** (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) y en el de **Cataluña** (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) se utiliza la expresión «Del Poder Judicial» (en Andalucía o Cataluña, respectivamente), en similares términos a la de «Del Poder Judicial en las **Islas Baleares**» del Título VI del Estatuto de esta Comunidad (tras reforma operada por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero). Por último, en **Aragón** (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril) el Título III emplea la rúbrica «De la Justicia» y dedica sus dos capítulos al «Poder Judicial en Aragón» y a «la Administración de Justicia».

En cualquier caso, sea cual sea la fórmula empleada («Organización Judicial», «Administración de Justicia» o «Poder Judicial»), el contenido de los correspondientes preceptos estatutarios debe atemperarse a la regulación constitucional contenida en los Títulos VI («Del Poder Judicial, artículos 117 a 127) y VIII («De la Organización Territorial del Estado», artículos 137 a 158) de la Constitución, cuestión sobre la que volveremos al analizar los artículos que integran el Título IV del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

regulan exhaustivamente en el Capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (artículos 70 a 79) y en las correspondientes Leyes procesales de los diversos órganos jurisdiccionales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Ley de Procedimiento Laboral). Según estas normas, el Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma respectiva, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, tomará el nombre de la Comunidad Autónoma correspondiente y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.

En cuanto al alcance de la cláusula general contenida en el precepto que se analiza, según la cual el Tribunal Superior de Justicia, en su correspondiente ámbito territorial, «es el órgano jurisdiccional ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales», ha de señalarse, en primer lugar, que la misma es idéntica a la que aparece en el artículo 152 de la Constitución y coincidente con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor el Tribunal Superior de Justicia «culminará la organización judicial en el ámbito territorial» de la correspondiente Comunidad Autónoma. Ello no obstante, no puede perderse de vista la verdadera **naturaleza jurídica** de este órgano jurisdiccional, pues los Tribunales Superiores de Justicia «no son órganos de la respectiva Comunidad Autónoma (STC 38/1982, fundamento jurídico 4), sino del Poder Judicial único que configura la Constitución (SSTC 56/1990 y 62/1990, fundamentos jurídicos 6.º y 4.º, respectivamente), al que se atribuye el ejercicio de la jurisdicción por los Juzgados y Tribunales que lo integran en todo el territorio español a tenor del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial» (Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de abril de 1994).

II. DESARROLLO LEGISLATIVO

El artículo 70 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señala que «el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo», añadiéndose en el artículo 71 del mismo Texto Legal que «tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta».

Evidentemente, la forma en que se actúe esa culminación de la organización judicial y la manera en que se desarrolle esa territorialidad (cuestión sobre la que volveremos) serán determinadas por la legislación reguladora de las competencias concretas, en los diversos órdenes jurisdiccionales, del Tribunal Superior de Justicia, lo que se regula en los artículos siguientes del propio Estatuto de Autonomía.

III. DERECHO COMPARADO AUTONÓMICO

La previsión de la existencia de un Tribunal Superior de Justicia y su configuración (coincidente con las exigencias constitucionales) son idénticas en el

Estatuto de Autonomía de Madrid y en la práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades españolas. Así, con simples diferencias de redacción, los Estatutos de Autonomía de Galicia (art. 21), Principado de Asturias (art. 36), Cantabria (art. 42), País Vasco (art. 34.1), Navarra (art. 59), La Rioja (art. 34), Castilla y León (art. 27), Castilla-La Mancha (art. 23), Aragón (art. 63), Comunidad Valenciana (art. 33), Región de Murcia (art. 34.2), Extremadura (art. 41), Canarias (art. 24) e Islas Baleares (art. 93) definen los Tribunales Superiores de Justicia como los órganos que culminan la organización judicial de la correspondiente Comunidad Autónoma en los términos establecidos en las correspondientes leyes procesales y sin perjuicio de la competencia que legalmente se atribuya al Tribunal Supremo.

También los Estatutos de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, art. 140) y Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, art. 95) recogen estas tres notas definitorias (culminación de la organización judicial en sus territorios, definición legal de sus competencias y reserva a favor del Tribunal Supremo), aunque añaden algún elemento más. Así: a) Atribuyen al Tribunal Superior de Justicia la competencia «para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto» (art. 140.1 del de Andalucía y 95.1 del de Cataluña²); b) Confieren «en exclusiva» al Tribunal Superior de Justicia correspondiente «la unificación del derecho» de Andalucía o de Cataluña (art. 140.3 y 95.3, respectivamente); c) Definen a dicho órgano como última instancia «de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial sea cual fuere el derecho invocado como aplicable» (art. 140.2 del de Andalucía y 95.2 del de Cataluña³); d) Otorgan al Tribunal Superior de Justicia la competencia para «la resolución de los recursos de revisión que autorice la ley contra resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales» de la correspondiente Comunidad (art. 140.3 del Estatuto andaluz y 95.4 del catalán⁴).

IV. JURISPRUDENCIA SOBRE EL PRECEPTO

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de delimitar con precisión el alcance de las dos notas esenciales que definen a los Tribunales Superiores de Justicia (su naturaleza y el significado de la territorialidad).

² En el recurso de inconstitucionalidad núm. 8045/06 interpuesto contra determinados preceptos del Estatuto catalán y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, se cuestiona esta atribución por entender que no pueden las Comunidades Autónomas realizar directamente la atribución de esta competencia por corresponder exclusivamente al legislador estatal.

³ En el recurso de inconstitucionalidad núm. 8045/06, ya citado, se combate la constitucionalidad de esta atribución competencial por asumir la Comunidad Autónoma directamente la competencia que viene reservada a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

⁴ En el mismo recurso se imputa al precepto la invasión de una competencia que corresponde en exclusividad al Estado.

Respecto de su configuración legal y constitucional, y como ya se apuntó, conviene insistir en la circunstancia de que los Tribunales Superiores de Justicia no son órganos de la respectiva Comunidad Autónoma (STC 38/1982, fundamento jurídico 4) sino del Poder Judicial único que configura la Constitución (SSTC 56/1990 y 62/1990, fundamentos jurídicos 6.º y 4.º, respectivamente), al que se atribuye el ejercicio de la jurisdicción por los Juzgados y Tribunales que lo integran en «todo el territorio español» (art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En cuanto a la territorialidad, el hecho de que los Tribunales Superiores de Justicia extiendan su competencia al territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma, «no entraña en modo alguno una correlativa restricción en la eficacia del fallo (...), de manera que los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia no sólo recaen aplicando el ordenamiento en su conjunto, sino que poseen eficacia en todo el territorio español» (STC 114/1994, de 14 de abril⁵).

⁵ Esta sentencia abordaba una cuestión de inconstitucionalidad deducida frente a la previsión, contenida en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a tenor de lo cual se otorgaba competencia a los Tribunales Superiores, en el ámbito contencioso administrativo, para conocer de recursos deducidos frente a actos dictados por la Administración del Estado. Para el Tribunal Constitucional, el artículo 152 CE nada dice sobre cuales sean las competencias objetivas que puedan corresponder a los Tribunales Superiores de Justicia, ya que su determinación corresponde al legislador, lo que permite que tales órganos judiciales extiendan su competencia a actos que se desenvuelven más allá del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma.